

6^a

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

Lima, veintidós de setiembre de dos mil diez.-

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial del Callao y los señores abogados José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto contra la sentencia de fojas seis mil trescientos, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil ocho; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra Flores; de conformidad en parte con la decisión del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y

CONSIDERANDO: Primero: Que, la parte civil al fundamentar su recurso de nulidad a fojas seis mil trescientos noventa y ocho, establece los siguientes agravios: i) no se encuentra conforme con el extremo de la sentencia que absuelve a José Alberto Fernández Bances, Roberto Navarro Soto, Alfonso Yañez Wurttel, María Rosario Lucho Chinga, Cirilo Ávila Peña, Pedro Zegarra Salazar, Carlos Enrique Medina Capcha, Stanislao Juan Loayza Palomino, Rodolfo Cruz Carnero, Luis Enrique Robles Ñique, Leonidas Domingo Quintana, Lely Inés Salazar Lozano, Carmela Cristina García Villareal, Abraham David Romero Soto y Armando Huasasquian y otros por el delito de peculado y colusión; que; ii) se encuentra creditada la participación de José Alberto Fernández Bances, quien ha ejercido el cargo de Director de la Institución Educativa "Simón Bolívar" por más de diez años, toda vez que, éste autorizó expresamente la compra de uniformes, además, pagó por concepto de servicios de periodista, abogado y contratación de servicio de seguridad, importes que no han sido justificados en el contexto de la realidad educativa del Instituto "Simón Bolívar; iii) que, el procesado Roberto Navarro Soto, en su condición de Jefe de

63

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

Administración, no cauteló los fondos educativos según los mecanismos de control y austeridad, por el contrario permitió la utilización indebida de los mismos; **iv)** que, el encausado Alfonso Yañez Wurttele coordinó directamente con el Director, Fernández Bances, respecto a la venta de uniformes y el cobro por concepto de exámenes médicos y práctica profesional, lo que se encuentra acreditado con el Informe de Control; **v)** que, respecto a los otros comprendidos por el delito de peculado, se tiene como denominador común que éstos efectuaron cobros indebidos, adicionales a sus remuneraciones, los que no le correspondían; que, es de advertirse que los cargos por delito de peculado y colusión, se encuentran acreditados con el mérito del Examen Especial reestructurado número cero cincuenta y tres – dos mil – AUD – OAI/DEC; asimismo, no se ha realizado en autos una pericia a efectos de confirmar o conocer exactamente el monto del perjuicio ocasionado a la Institución, lo que ha conllevado a que el Colegiado Superior absuelva a los encausados de toda responsabilidad; **vi)** que, respecto al delito de concusión atribuido a los encausados José Alberto Fernández Bances, Roberto Navarro Soto, Alfonso Yañez Wurttele y María Rosario Lucho Chinga, se debe indicar que con el Informe número cero cincuenta y tres – dos mil – AUD – OAI / DEC se acredita que éstos abusando de sus cargos obligaron o indujeron a una persona a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial; finalmente, **vii)** que en cuanto al delito de exacción ilegal imputado a los encausados Cirilo Ávila Peña, Pedro Zegarra Salazar, Carlos Enrique Medina Capcha, Stanislao Juan Loayza Palomino, Rodolfo Cruz Carnero, Luis Enrique Robles Ñique, Leonidas Dongo Quintana, Lely Inés Salazar Lozano, Carmela Cristina García Villarreal, Abraham David Romero Soto,

66

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

Armando Huasasquiche Avalos y a Roberto Navarro Soto, se tiene que con el Informe antes citado, se acredita que estos efectuaron una doble percepción de ingresos, es decir, una suma adicional al pago mensual por planillas de haberes; que por las razones precedentemente expuestas, se encuentran acreditados los actos ilícitos cometidos por los encausados, los mismos que han lesionado el regular desenvolvimiento de la administración pública y la confianza depositada en ellos. Por su parte, el sentenciado Fernández Bances al fundamentar su recurso de nulidad a fojas seis mil trescientos setenta y ocho, señala que mediante Resolución Ministerial número seiscientos sesenta del veintiuno de agosto de dos mil dos, suscrita por el Ministro de Educación de entonces, se resolvió administrativamente relevarlo de toda responsabilidad por los hechos identificados en el Examen Especial número cero cincuenta y tres - dos mil - AUD - AI / DEC; que, el Informe Contable número ciento veintidós - dos mil tres - DIRINOR - PNP / IFIAUCON de fojas tres mil ochocientos veinticinco y el dictamen acusatorio de fojas cinco mil quinientos once concluyen que "...las personas que efectuaron la Auditoria al Instituto Superior Tecnológico "Simón Bolívar" no han cumplido con las normas de auditoría gubernamental y principios de contabilidad...". Finalmente, el sentenciado Navarro Soto al fundamentar su recurso de nulidad a fojas seis mil trescientos cuarenta, refiere que ninguno de los gastos que se realizaron fueron cubiertos con fondos del Estado, sino con dinero autogenerado por el Instituto presuntamente agraviado, el cual tiene carácter privado; que, los actos efectuados por su co procesado, Fernández Bances, fueron realizados sin dolo, por el contrario, en todo momento se buscó lo mejor para la Institución educativa; que, no tuvo intervención alguna en la

63/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

contratación de la empresa de seguridad "Burgos Servis Empresa Individual de Responsabilidad Limitada" y en la confección de los uniformes. **Segundo:** Que, de acuerdo al dictamen acusatorio de fojas cinco mil doscientos veintisiete, se imputa a José Alberto Fernández Bances, en su calidad de Director del Instituto Superior Tecnológico "Simón Bolívar", los siguientes hechos: **a)** haberse apropiado del dinero recaudado por concepto de matrícula del examen de admisión correspondiente al período mil novecientos noventa y nueve – II por el monto de doscientos noventa y cinco mil nuevos soles, dinero que debió destinarse al mantenimiento y reparación de equipos, así como a la adquisición de equipos de vigilancia; **b)** haber malversado los recursos del Instituto por un monto de veintitrés mil cien nuevos soles, los cuales destinó a la confección del uniforme del personal de dicha entidad, en lugar de emplearlo en la implementación de la biblioteca con libros actualizados, mantenimiento de la infraestructura, equipamiento de talleres, laboratorios y renovación de mobiliario; **c)** haber contratado personal de vigilancia de la Empresa "Burgos Servis Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", pese a que la Institución agraviada contaba con personal de planta para desempeñar labores de guardianía, habiendo dispuesto de la suma de seis mil seiscientos ocho nuevos soles en forma mensual para efectuar el pago respectivo, lo cual excede el monto recaudado de doce mil doscientos cincuenta y siete nuevos soles, dinero que pudo utilizarse en beneficio de los alumnos; **d)** haber malversado la suma de cuatro mil doscientos setenta y ocho nuevos soles con ochenta y ocho céntimos en gastos de movilidad, viáticos y fotocopias, pese a que dicho monto estaba destinado a la reparación de dos fotocopiadoras; **e)** haber dispuesto la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

suma de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nuevos soles del rubro de "recursos propios" para efectuar pagos por servicios no personales a favor de Carmen Garrido Rivas (abogada), Mario Bozzeta Garces (periodista) y Armando Huasasquiche Ávalos (contador), hechos para los que contó con la colaboración de su co encausado Roberto Navarro Soto, en su calidad de Jefe de Administración de dicho Instituto, quien se encargaba, entre otras funciones, del control y autorización (ingreso y egreso de bienes) y la visación de pagos en la modalidad de servicios no personales; que, asimismo, se imputa a José Alberto Fernández Bances, Roberto Navarro Soto, Alfonso Yañez Wurttel - Jefe del Departamento de Enfermería Médica - y María Rosario Lucho Chinga - docente de la Especialidad de Enfermería Técnica -, haber efectuado cobros indebidos a los alumnos de dicha entidad educativa, no autorizados por la Dirección de Educación del Callao y/o del Ministerio de Educación, tales como: **a)** pago por exámenes médicos obligatorios; **b)** compra de uniformes a razón de cuarenta nuevos soles cada uno; **c)** pago de doscientos nuevos soles por asesoramiento para graduación y de cien nuevos soles por seminario de titulación ordinaria y extraordinaria; asimismo, la procesada Lucho Chinga efectuó el cobro de doscientos nuevos soles a las alumnas de la especialidad de enfermería técnica para que realicen sus prácticas en el Centro de Salud "Perú - Corea"; finalmente, se atribuye a los procesados José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto haber autorizado pagos indebidos por un monto ascendente a dieciséis mil seiscientos noventa y tres nuevos soles, en beneficio de los procesados Cirilo Ávila Peña, Pedro Zegarra Salazar, Carlos Enrique Medina Capcha, Rodolfo Cruz Carnero y el citado Roberto Navarro Soto (docentes nombrados),

64

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

Luis Enrique Robles Ñique, Leonidas Dongo Quintana y Lely Inés Salazar Lozano (personal contratado), e incluso haberse pagado a Carmela Cristina García Villarreal, Abraham David Romero Soto, Armando Huasasquiche Ávalos y a Roberto Navarro Soto sus remuneraciones por ocupar los cargos de Secretaria General, Jefe de Computación e Informática, Jefe de Producción y Servicios, y Jefe de Administración, pese a que dichas plazas no estaban presupuestadas; del mismo modo se imputa a Carmela Cristina García Villarreal y Pedro Zegarra Salazar haber cobrado doble remuneración entre los meses de enero a abril del año dos mil, mientras que el encausado Armando Huasasquiche Ávalos (contador) cobró por honorarios la suma de mil trescientos nuevos soles y por planillas la suma de setecientos noventa y cinco nuevos soles con setenta céntimos. **Tercero:** Que, de acuerdo al artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, este Supremo Tribunal realizara el pronunciamiento correspondiente, respecto a los extremos debidamente impugnados - tanto por la parte civil, como por los condenados -, estos es, se tomarán en cuenta los agravios expuestos por los impugnantes. **Cuarto:** Que, el Procurador Público, al fundamentar su recurso de nulidad, ha impugnado diversos extremos de la sentencia dictada por el Colegiado Superior, los mismos que se han citado en el primer considerando - y que en dicho orden serán evaluados por este Supremo Tribunal -: así se tiene: **i)** el extremo absolutorio por los delitos de peculado y colusión, al respecto debe indicarse que la imputación efectuada por el Fiscal Superior en cuanto a estos dos tipos penales, solo alcanza a los encausados José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto, más no a los demás encausados absueltos - como erróneamente lo ha

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

expuesto el recurrente -, por tanto, el análisis en este extremo se encontrará referido única y exclusivamente a los dos procesados mencionados.

Quinto: Que, en dicho orden de ideas, la imputación respecto al delito de peculado, se basa en que los encausados Fernández Bances y Navarro Soto se habrían apropiado del dinero recaudado por concepto de matrícula para el examen de admisión del período mil novecientos noventa y nueve, por un monto ascendente a doscientos noventa y cinco mil nuevos soles; sin embargo, dicha imputación no ha sido corroborada con elemento de prueba alguno, por el contrario, se desvirtúa con el Informe Contable número ciento veintidós - dos mil tres - DIFINCHI - PNP / IFIAUCON de fojas tres mil seiscientos treinta y dos, debidamente ratificado a fojas cinco mil ciento sesenta y siete, en el que se ha consignado como una de sus conclusiones lo siguiente "...e) Que de acuerdo a la evaluación efectuada a la documentación contable que obra en el Tomo XII con relación al descargo por parte del ex Director del Instituto Superior Tecnológico Público "Simón Bolívar", referente al Balance Económico de los ingresos y egresos del Proceso de Admisión de agosto de mil novecientos noventa y nueve - mayo dos mil, se ha constatado que han remitido el Informe Financiero al Director de la Dirección de Educación del Callao, incluyendo los Programas de Nivelación Académica, donde dan a conocer que hubo ingresos por ciento quince mil trescientos ochenta y cinco nuevos soles y egresos por sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro nuevos soles con noventa y dos céntimos, existiendo una utilidad de cincuenta y dos mil ochocientos treinta nuevos soles con ocho céntimos..."; de lo que se colige que no se encuentra acreditado que éstos se hayan apropiado de dinero alguno perteneciente a la citada institución educativa, es

31

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

1.1.3

más los precitados han mantenido a lo largo del proceso una negativa constante y enfática respecto a éstos cargos. **Sexto:** Que, respecto al delito de colusión que se les atribuye a los encausados José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto, debe mencionarse que la imputación en dicho extremo se encuentra referida al hecho que éstos de manera concertada realizaron diversos pagos de manera irregular hasta por la suma cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nuevos soles, dinero que fue sacado del rubro "recursos propios" para realizar pagos de manera concertada por servicios no personales a favor de Carmen Garrido Rivas (abogada), Mario Bozzeta Garcés (periodista) y Armando Huasasquiche Avalos (contador público); que, en tal sentido, se advierte de autos que en cuanto a estos extremos, el representante del Ministerio Público, quien es el titular de la carga de la prueba no ha podido acreditar de manera fehaciente e incontrovertible, que haya existido una concertación entre los precitados a efectos de defraudar a la institución educativa, que si bien es preciso mencionar que no existió un proceso de selección a efectos de contratar a las citadas personas, sin embargo, ello no resulta suficiente para tener por acreditada la responsabilidad penal de Fernández Bances y Navarro Soto, pues en todo caso, ello resultaría ser una falta de carácter administrativa, tal como así se consideró en la Resolución Ministerial número seiscientos sesenta – dos mil dos – ED, del veintiuno de agosto de dos mil dos.

Sétimo: Que, en cuanto al agravio **ii)** contenido en el recurso de nulidad de la parte civil, debe indicarse que tanto la imputación por la compra de uniformes y la contratación del servicio de seguridad han sido considerados por el Colegiado Superior como delito de malversación de fondos – extremo que ha sido materia de condena -, por lo tanto, no cabe

F

42

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

efectuar pronunciamiento al respecto, toda vez que, de manera errada el impugnante los ha considerado como delito de peculado, es más, en cuanto al pago realizado a favor de Carmen Garrido Rivas, en su calidad de abogada y de Mario Bozzeta Garcés, periodista, debe indicarse que dicho extremo ya ha sido materia de evaluación y pronunciamiento en el considerando precedente, incluso ello fue materia de imputación por el delito de colusión, más no por el de peculado como erróneamente lo ha planteado el recurrente. **Octavo:** Que, respecto al punto **iii)** de los agravios expuesto por la parte civil, se debe indicar que no existe elemento o prueba que demuestre la falta de cautela en que habría incurrido el encausado Roberto Navarro Soto en el cumplimiento de sus funciones, ello pues como se ha señalado anteladamente no se encuentra acreditada la apropiación indebida de dinero alguno perteneciente al Instituto Superior "Simón Bolívar", por tanto, dicho agravio carece de sustento, más aún cuando sólo se ha realizado por el impugnante una sindicación genérica. **Noveno:** Que, en cuanto a los agravios referidos a la absolución dispuesta por el Colegiado Superior a favor de los encausados José Alberto Fernández Bances, Roberto Navarro Soto, Alfonso Yañez Wurttle y María Rosario Lucho Chinga, por el delito de concusión, se debe indicar que dicha imputación estriba en que Yañez Wurttle coordinó directamente con Fernández Bances para la venta de uniformes, además, de que todos los precitados intervinieron en el cobro indebido por concepto de exámenes médicos, prácticas profesionales en el centro de salud "Perú - Corea", asesoramiento para la graduación y seminario de titulación; que al respecto, es preciso señalar que si bien se realizaron dichos cobros, no se ha podido demostrar en el proceso que éstos

477

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

hayan sido requeridos de manera indebida y a favor de los precitados, por el contrario, la obligatoriedad de dichos pagos estaban destinados a las arcas de la entidad educativa, lo que se desprende del Informe Especial Reestructurado número cero cincuenta y tres – dos mil – AUD – OAI / DEC de fojas cincuenta y dos y el Informe contable número ciento veintidós – dos mil tres – DIRINCRI – PNP / IFIAUCON de fojas tres mil seiscientos treinta y dos, en los que se precisa que los ingresos recaudados fueron utilizados para el pago de distintos rubros dentro de la Institución, aunándose a esto, que tanto la obligatoriedad del uso del uniforme y el pago para la realización de prácticas y asesoría, es un requerimiento expreso de los centros de salud e incluso en el caso de la primera exigencia – uso de uniforme -, así se establece en el documento denominado "Normas para la realización de prácticas profesionales", obrante a fojas cinco mil quinientos setenta y tres, y que respecto a los demás cobros, éstos obedecen a actividades generadoras de ingresos propios, por tanto, tienen su pertinencia en la vía administrativa, lo que permite concluir a este Supremo Tribunal que la absolución en este extremo se encuentra arreglado a ley. **Décimo:** Que, respecto al punto **v)** de los agravios planteados por la parte civil, debe indicarse que éste realiza una argumentación general señalando *"en el caso de los otros comprendidos por este delito de peculado, se tiene como denominador común que efectuaron de la Institución cobros indebidos.."*; que, en tal virtud, es del caso indicar que el análisis respecto al delito de peculado ya se ha realizado anteriormente y dicho tipo penal sólo alcanza a los encausados Fernández Bances y Navarro Soto, más no a los demás encausados, por tanto, este Supremo Tribunal considera que no es del caso realizar valoración ni pronunciamiento

44

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 2991-2009

CALLAO

alguno. **Décimo Primero:** Que, en cuanto al punto **vii)** es preciso indicar que este extremo de la impugnación se encuentra referido a la absolución por el delito de exacción ilegal, que se le atribuye a José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto por haber autorizado el pago de doble percepción de ingresos a Cirilo Ávila Peña, Pedro Zegarra Salazar, Carlos Enrique Medina Capcha, Stanislaw Juan Loayza Palomino, Rodolfo Cruz Carnero, Luis Enrique Robles Nique, Leonidas Dongo Quintana, Zely Inés Salazar Lozano, Carmela Cristina García Villarreal, Abraham David Romero Soto, Armando Huasasquiche Ávalos, a quienes se les inculpa a su vez haber sido beneficiados con tales pagos, al respecto debe indicarse que la conducta atribuida a estos últimos no se subsume en los presupuestos del mencionado tipo penal, pues, no se aprecia que hayan abusado de sus cargos para obligar o inducir a error al sujeto pasivo para que de o prometa dichos pagos, es decir, no se advierte elemento de prueba que acredite que se haya forzado a los encausados Fernández Bances y Navarro Soto para que realicen tales egresos de dinero a su favor; por el contrario, se puede advertir que tales pagos se dispusieron como contraprestación por las labores de apoyo realizadas fuera del horario de trabajo en tareas de connotación administrativa por un monto equivalente a quince mil cuatrocientos cuarenta y tres nuevos soles, y por servicios de personal contratado por la suma de tres mil doscientos cincuenta nuevos soles, los mismos que se encuentran sustentados con recibos simples, según se advierte del Informe pericial contable de fojas tres mil seiscientos treinta y dos, en el cual se consigna como conclusión "...Durante la gestión del ex Director del I.S.T.P. "Simón Bolívar" se han efectuado gastos por dieciocho mil seiscientos noventa y tres nuevos soles con el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

financiamiento de recursos propios del Instituto, en trabajos diversos efectuados por el personal nombrado y/o contratado, durante el período dos mil, sustentado en recibos simples emitidos por el Instituto..."; lo que a su vez se condice con las declaraciones prestadas por los encausados durante el proceso penal, labores que incluso encuentran amparo legal por el Decreto Supremo número cero cincuenta y siete - ochenta y siete - ED que modifica el "Reglamento para el Desarrollo de Actividades Productivas en Colegios, Institutos Superiores Tecnológicos y Centros de Educación Ocupacional Estatales", el cual permite la realización de actividades productivas y el pago correspondiente por la producción de bienes y/o prestación de servicios fuera del horario normal de trabajo, dispositivo legal que a su vez guarda relación con el Decreto Supremo número cero treinta y nueve - ochenta y cinco - ED "Reglamento Especial para los Docentes de Educación Superior", el cual si bien impide el desempeño de otros cargos durante la jornada laboral, sin embargo, no impide el desarrollo de actividades fuera de dicho término; asimismo, en el caso de los pagos adicionales no presupuestados efectuados a favor de Carmela Cristina García Villarreal, en su calidad de Secretaria General, éste se encuentra autorizado por las Resoluciones Directorales de fojas tres mil novecientos sesenta y tres y tres mil novecientos sesenta y cuatro, mientras que respecto a los supuestos pagos adicionales que se habrían realizado a favor de los encausados Navarro Soto y Romero Soto, debe indicarse que en autos no se advierte documento alguno que acredite la efectivización de dichos egresos dinerarios, por tales consideraciones este extremo de la sentencia impugnada se encuentra también arreglado a ley; finalmente, debe indicarse que en cuanto a este

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

extremo del pronunciamiento no es del caso referirnos a la imputación recaída contra Estanislao Juan Loayza Palomino por el mencionado delito - exacción ilegal -, toda vez que respecto éste se declaró extinguida la acción penal por muerte. **Décimo Segundo:** Que, respecto a las impugnaciones efectuadas por los sentenciados José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto, el presente pronunciamiento debe limitarse al extremo condenatorio por delito de malversación de fondos, toda vez que, respecto a los otros extremos materia de imputación (peculado, coacción y concusión) se ha emitido pronunciamiento absolutorio que en nada les perjudica; en tal sentido, debe indicarse que los cargos imputados por delito de malversación de fondos, se encuentran referidos a que éstos en su calidad de Director y Jefe de Administración, respectivamente, del Instituto Superior "Simón Bolívar" malversaron la suma de veintitres mil cien nuevos soles, que fue utilizada en la confección del uniforme del personal del Instituto en lugar de emplearse en otros rubros a favor de la entidad educativa (como implementación de la biblioteca, mantenimiento de la infraestructura, entre otros); asimismo, dispuso la contratación de la empresa de seguridad "Burgos" y la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", pese a que la citada institución educativa contaba con personal para desempeñar dichas labores, habiéndose utilizado de manera indebida un monto mensual de seis mil seiscientos ocho nuevos soles, que debió ser utilizado a favor de los alumnos; en dicho orden de ideas, debe precisarse que de acuerdo al Examen Especial Reestructurado número cero cincuenta y tres - dos mil - AUD - OAI / DEC de fojas treinta y nueve, se advierte que los fondos dispuestos en las actividades precitadas, provenían del rubro "recursos directamente,

44

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

recaudados", es decir, fue obtenido mediante actividades productivas ejecutadas por la Institución agraviada (proceso de admisión, prestación de servicios educativos, entre otros), por tal motivo, la utilización de dichos recursos se encontraba regulado por el Decreto Supremo número cero cincuenta y siete – ochenta y cinco - ED que modificó el "Reglamento para el Desarrollo de actividades productivas en Colegios, Institutos Superiores Tecnológicos y Centros de Educación Ocupacional Estatales", que establece en su artículo cuarto "...El desarrollo de actividades productivas, se orientará a satisfacer las necesidades de producción de bienes y/o prestación de servicios en concordancia con los planes de desarrollo departamental, zonal y/o local, generando de esta manera ingresos propios, destinados para fines educativos de las Instituciones que los realicen en conformidad con los lineamientos de la Política del Sector Educación...", lo que guarda concordancia con lo previsto en el artículo diecinueve del citado dispositivo legal que señala: "... Los ingresos propios se distribuirán de la siguiente manera: a) hasta el cincuenta por ciento para el mejoramiento y mantenimiento de las infraestructura, máquinas, compra y/o renovación de herramientas, equipos, etc.; b) hasta el treinta por ciento para el establecimiento de un fondo de producción e investigación para el inicio de nuevos proyectos de actividades productivas, en el mismo Colegio, Institutos Superiores Tecnológicos o Centros de Educación Ocupacional; c) hasta el quince por ciento para la capacitación y estímulo del personal que participa en el Desarrollo de actividades productivas; y d) hasta el cinco por ciento para el establecimiento de un fondo de apoyo para material de enseñanza en aula..."; de igual modo, ello encuentra relación y concordancia,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

además, con la Resolución Ministerial número ciento ochenta y ocho – noventa – ED “Reglamento de Admisión a los Institutos Superiores Tecnológicos”, en cuanto se indica que el dinero remanente del proceso de admisión será invertido en la implementación de proyectos de inversión, libros de consulta profesionales y elementos necesarios para el desarrollo curricular de formación tecnológica. **Décimo Tercero:** Que, lo precedentemente expuesto entonces, permite inferir de manera contundente que el dinero utilizado en la compra de uniformes y en el pago de una empresa de seguridad con dinero directamente recaudado por el Instituto Superior Tecnológico Público “Simón Bolívar”, fueron encausados de manera definitiva diferente a otros rubros que no estaban contemplados en las normas precisadas, lo cual evidentemente generó una afectación del servicio que debió prestarse al alumnado, para el mejoramiento y mantenimiento de la Institución educativa y el desarrollo de proyectos de actividades productivas; hechos por los que resulta responsable el procesado José Alberto Fernández Bances, pues en su calidad de Director del Instituto Superior Tecnológico Público “Simón Bolívar” tuvo relación funcional con los fondos dispuestos de manera definitiva diferente. Lo mismo sucede con el encausado Roberto Navarro Soto, quien se desempeñó como Jefe de Administración del citado Instituito, siendo que de acuerdo al Reglamento General de la mencionada entidad educativa que en copia fotostática obra a fojas mil trescientos cincuenta se estableció en su artículo veintiocho como funciones del Área de Administración, entre otros: “...a) Coordinar y ejecutar acciones de administración de personal y de los recursos materiales y económicos – financieros debidamente autorizados, según normas vigentes de control (...) b) Programar, adquirir, almacenar y

34

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

*distribuir eficientemente los diversos recursos del Instituto..."; en tal virtud, el pronunciamiento condenatorio en este extremo se encuentra arreglado a ley. **Décimo Cuarto:** Que, no obstante, lo expuesto en el considerando anterior debe indicarse que en el delito *sub examine* - malversación de fondos -, se advierten dos elementos que constituyen su estructura típica: a) la relación funcional existente entre el sujeto activo y la administración del dinero o bienes y b) la aplicación definitiva diferente que se da a los fondos públicos, no necesitándose para su configuración la lesión del patrimonio del Estado, pues en estos casos se cumple con la finalidad social, pero en forma no debida, ni pre establecida, consecuentemente, el bien jurídico que se afecta con el delito de malversación de fondos es la regularidad y buena marcha de la administración pública, preservando la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos, es decir, la racional organización en la ejecución del gasto y en la utilización y/o empleo del dinero y bienes públicos; por tanto, es de indicarse que en el presente caso no opera la duplicación del plazo de prescripción a que se contrae el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal, siendo del caso la aplicación del plazo de prescripción extraordinaria, regulada en el artículo ochenta y tres del citado cuerpo legal; en tal virtud, encontrándose sancionado dicho tipo penal con una pena no mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal, será de seis años. **Décimo Quinto:** Que, en dicho orden de ideas, se advierte que el Informe Especial número cero cincuenta y tres - dos mil - OAI / DEC, del veintiséis de junio de dos mil y la Reestructuración de dicho Informe Especial de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno, donde se han puntualizado los cargos materia de*

00
/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

imputación a los procesados Fernández Bances y Navarro Soto, se refieren al examen contable realizado a la Instituto Superior Tecnológico Público "Simón Bolívar", durante el período mil novecientos noventa y nueve - dos mil, en tal virtud, desde dicha fecha a la actualidad ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción indicado en el acápite anterior, incluso el momento en que se dictó sentencia en la instancia Superior ya la acción penal, por el transcurso del tiempo, se había extinguido; por tales consideraciones debe disponerse de oficio por este Superior Tribunal el archivamiento de la presente causa en este extremo por prescripción. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fojas sesenta y trescientos, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil ocho, en los extremos que **i)** absolvió a José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto de los cargos contenidos en la acusación fiscal por delito contra la Administración Pública - peculatio, concusión, colusión y exacción legal, en agravio del Estado; **ii)** absolvió a Alfonso Yañez Wurttel y María Rosario Lucho Chinga de los cargos contenidos en la acusación fiscal por delito contra la Administración Pública - concusión, en agravio del Estado; **iii)** absolvió a Arilo Ávila Peña, Pedro Zegarra Salazar, Carlos Enrique Medina Capcha, Rodolfo Cruz Carnero, Luis Enrique Robles Ñique, Leonidas Dongo Quintana, Lely Inés Salazar Lozano, Carmela Cristina García Villarreal, Abraham David Romero Soto y Armando Huasasquiche Ávalos de los cargos contenidos en la acusación fiscal, por delito contra la Administración Pública - exacción legal, en agravio del Estado; asimismo, **NULA** la citada sentencia en cuanto condenó a José Alberto Fernández Bances y Roberto Navarro Soto por delito contra la Administración Pública - malversación de fondos, en agravio del

31

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 2991-2009
CALLAO

Estado, imponiéndoles cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el término de tres años, con lo demás que al respecto contiene; y de oficio declararon EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN a favor de los encausados Fernández Bances y Navarro Soto, por el precitado delito y agraviado; en consecuencia, **DISPUSIERON:** el archivo definitivo de los actuados; con lo demás que al respecto contiene; y, los devolvieron.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

SANTA MARÍA MORILLO

NF/eamp

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO
SECRETARIO(e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA